ESCALADA DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN BOLIVIA

POR ROMINA VIALE

El gobierno de Evo Morales se vio nuevamente rodeado por una serie de protestas sociales que tuvieron como epicentro a la ciudad de La Paz, y que pusieron de manifiesto una tendencia a la erosión del apoyo social al líder cocalero. A los reclamos de sectores como el de los universitarios, médicos, transportistas y mineros; durante el mes de junio aparecieron en el centro de la agenda política y social las demandas de los policías y, una vez más, las de los indígenas amazónicos y a los de Potosí.

Tras su reelección en el 2010, Morales ha tenido que superar una serie de situaciones conflictivas, originadas por reclamos surgidos del seno mismo de sectores sociales que propiciaron su arribo y permanencia en la presidencia. Que las mismas han impactado en la caída de la popularidad de Morales al 39% en comparación con el 64% que alcanzó en la referida elección.

Hasta el momento, y pese a diferentes escaladas de la tensión, denuncias cruzadas y acusaciones mutuas entre los diferentes sectores políticos nacionales, el gobierno boliviano ha podido atravesar exitosamente la oleada de reclamos, apaciguando la conflictividad social y atendiendo, en la mayoría de los casos, a los reclamos populares.

De los tres conflictos mencionados, el más relevante en función a su repercusión, implicancias y alcance, fue el de los agentes y suboficiales de la Policía Nacional que iniciaron un motín de seis días que dejó a la totalidad del país sin servicios policiales. Los principales impulsores de las protestas fueron los oficiales de bajo rango, que rechazaron el incremento de 32 dólares propuesto por el gobierno, y actuaron realizando diferentes demostraciones de fuerza como el saqueo al edificio donde funciona la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía y la Interpol, quemando asimismo sus archivos.

La posterior represión a una marcha en apoyo al oficialismo y al mantenimiento del proceso de cambio y mejoras sociales, llevó al gobierno a especular sobre la posibilidad de un intento de golpe de Estado.

Para Evo Morales, y su núcleo más cercano de funcionarios, "la intransigencia de algunos policías que rechazaron el convenio y usaron violencia contra ciudadanos muestra que buscan algo más que mejoras salariales, buscan la desestabilización del gobierno".

Según el Presidente boliviano, los grupos de derecha infiltrados en los reclamos pretendían ocasionar muertos y heridos para propiciar un golpe de Estado tal como ocurrió en Paraguay con la destitución del presidente electo, Fernando Lugo tras un desalojo de campesinos que derivó en un enfrentamiento con un saldo de 17 muertos. Asimismo, denunció públicamente conspiraciones para asesinar al Ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Por su lado, los sectores opositores negaron enfáticamente las acusaciones del gobierno y se refirieron a "una paranoia golpista que pretende encubrir el desgaste gubernamental".

Mientras la capital política de Bolivia estaba siendo afectada por los reclamos policiales, un grupo de 200 indígenas abrían un nuevo frente de conflicto al arribar a la ciudad luego de haber recorrido más de 600 kilómetros en protesta por la construcción de una autopista que pretendía atravesar el parque nacional Tipnis. Los dirigentes aborígenes decidieron acampar en las afueras de La Paz, aguardando la finalización de las protestas de los oficiales, y luego se trasladaron a la Plaza de Armas, esperando ser atendidos por el presidente Morales.

Finalmente, grupos de aborígenes mineros de la población de Mallku Khota al norte de Potosí también encabezaron reclamos en contra de la concesión minera a la empresa canadiense South American Silver, lo que derivó en enfrentamientos fata-

les entre grupos indígenas detractores y partidarios de la empresa y en la posterior toma de rehenes de funcionarios de la misma.
Pese a la contemporaneidad de los reclamos y al asedio de demandas recibidas, el gobierno pudo alcanzar soluciones favorables. Por el lado de los policías, la tranquilidad y la restitución de los servicios llegó tras la firma de un acuerdo de 10 puntos en el que se establece, entre otras cuestiones, un incremento de 100 bolivianos (13 dólares) al haber básico y un bono adicional de 200 bolivianos (26 dólares), con lo que el sueldo de los agentes de menor graduación se equipara así con el de sus pares de las Fuerzas Armadas, tal como reclamaban. Asimismo, el acuerdo incorpora la doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), la creación de la Defensoría de la Policía y la formación de una comisión para analizar la jubilación con el 100% del salario.
Los reclamos de los mineros de Mallku Khota también fueron atendidos. En este caso, se estableció la suspensión de las actividades de exploración y explotación de la empresa canadiense en la mina, estipulando la nacionalización de la misma.
No obstante, los indígenas amazónicos no corrieron la misma suerte. La segunda marcha que realizaron a La Paz en menos de un año para preservar el territorio del Tipnis y a su flora y fauna autóctona, culminó con la decisión de retirarse ante la negativa de Morales de reunirse con los dirigentes indígenas debido a la falta de acuerdo sobre la presencia del Consejo Indígena del Sur (Conisur) en las negociaciones. Mientras que el gobierno consideraba que debería estar presente; la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), convocante de la marcha, entendía lo contrario alegando que no pertenece al Tipnis.
No obstante, los principales referentes de la protesta destacaron sus intenciones de continuar en la lucha y anunciaron el rechazo y resistencia al proceso de consultas sobre la construcción de la carretera que el gobierno iniciará el próximo 20 de julio.
Durante los últimos meses, el escenario nacional boliviano se ha caracterizado por una escalada de conflictividad social creciente. Hasta el momento, el gobierno de Morales ha podido sortear las diferentes situaciones generadas por los reclamos populares vinculados con demandas específicas de cada sector. Sin embargo, el interrogante principal se vincula con la capacidad gubernamental de por un lado, responder a este espiral de reclamos cuya onda expansiva parece no tener un final cercano y por el otro, a las posibilidades de fortalecer su base de apoyo popular, la cual parece estar atravesando por una etapa de profunda erosión.

“el escenario nacional boliviano se ha caracterizado por una escalada de conflictividad social creciente. Hasta el momento, el gobierno de Morales ha podido sortear las diferentes situaciones generadas por los reclamos populares vinculados con demandas específicas de cada sector.”